JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá, D.C., veintidós de agosto de dos mil veintitrés.

Acción de Tutela No. 110014003 057 2023 00692 01

Resuelve el Juzgado la impugnación a que fue sometido el fallo de tutela proferido el 05 de julio de 2023 por el Juzgado 57 Civil Municipal de Bogotá, dentro de la acción de tutela promovida por DIANA PAOLA MIRANDA contra la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ.

1. ANTECEDENTES

1.1. La señora Miranda promovió acción de tutela implorando la protección constitucional de su derecho fundamental de petición, y en consecuencia, solicitó que se ordene a la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ dar contestación a la solicitud presentada el pasado 23 de abril de 2023 ante esa entidad, de manera clara, precisa completa y congruente con lo pretendido en la petición.

Adujo la accionante, que presento a la entidad accionada derecho de petición el 23 de abril de 2023, y si bien el 23 de mayo siguiente, respondió la petición, no dio una respuesta clara, precisa, completa y congruente en relación con los hechos y pretensiones de aquella petición, por lo que considera trasgredida la aludida garantía fundamental.

La SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ, una vez notificada de la tutela, pidió plazo para darle contestación, sin embargo, no hizo pronunciamiento alguno.

2. EL FALLO IMPUGNADO

El Juzgado de primera instancia, tras constatar la radicación del derecho de petición por la parte accionante el ante la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ, el 23 de abril del año en curso, respecto de la orden de comparendo No. 1100100000035419165, y poner de manifiesto que la autoridad accionada tenía hasta el 15 de mayo de 2023 para emitir respuesta a la petición, señaló que no había prueba en el expediente que demostrara haberse contestado la memorada petición, sumado el hecho de que la SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ no realizó pronunciamiento alguno frente a los hechos y pretensiones de la tutela, ni dentro del término concedido en el auto admisorio ni posteriormente, por lo que dispuso la aplicación del artículo 20 del Decreto 2591 de

1991, teniendo por ciertos los hechos en que se fundamentó la queja constitucional.

En ese sentido, halló vulnerado el derecho de petición del actor y concedió el amparo deprecado, ordenando a la Secretaría Distrital de Movilidad, si aún no lo hubiere hecho, dar contestación de la referida solicitud, poniendo en conocimiento del convocante dicha respuesta.

3. LA IMPUGNACIÓN

Dentro del término legal, la parte accionada impugnó la sentencia de primera instancia, manifestando, en síntesis, que dio cumplimiento al fallo de tutela, brindando la respectiva respuesta a la petición de la actora, que fue remitida a su correo electrónico, por lo que considera que debe declararse la existencia de un hecho superado.

4. CONSIDERACIONES

4.1. Sea lo primero señalar, que conforme al artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, la acción de tutela es el mecanismo idóneo para la protección de los derechos constitucionales fundamentales frente a la vulneración o amenaza por la acción u omisión de las autoridades públicas, y en algunos casos de los particulares, siempre que no se disponga de otra vía judicial expedita para ello, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable al tenor de lo preceptuado en los artículos 1º, 5º y 8º del Decreto 2591 de 1991.

4.2. El presente trámite se inició, fundamentalmente, por la presunta vulneración del derecho de petición. El artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el canon 1º de la Ley 1755 de 2015 *-por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-*, y el cual se acompasa con lo previsto en la norma 23 Superior, lo ha definido como el que tiene toda persona para presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular, con miras a obtener una pronta resolución, advirtiéndose, además, por vía jurisprudencial que a diferencia de los términos o procedimientos judiciales, esta protección fundamental es una vía expedita de acceso directo a las autoridades, y aunque su objetivo no incluye la exigencia de una resolución en un sentido determinado, sí intima para que exista un pronunciamiento oportuno y concreto frente a la reclamación que se invoca.

Por otro lado, conforme lo establece el artículo 14 del CPACA, modificado por la citada Ley, salvo norma especial, las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Asimismo, y conforme al párrafo de dicho canon normativo, en caso de no resolverse la petición dentro del lapso citado *"la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado (...) expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo en que se resolverá o dará repuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto"*.

Adicional a lo anterior, recuerda esta judicatura que, conforme a los lineamientos antes expuestos, el término de 15 días con que originalmente contaban las entidades, para resolver la petición formulada, dicho plazo fue ampliado conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 491 de 2020, expedido por el Gobierno Nacional con ocasión al estado de emergencia sanitaria decretado, por lo que el estudio de las peticiones causa de la acción de amparo debían responderse dentro del término de 30 días. Posteriormente, mediante la Ley 2207 del 17 de mayo de 2022, se derogó el precepto 5º antes mencionado, por lo que a partir del día siguiente de la promulgación de esa norma, el término para resolver las peticiones, volvió a ser de 15 días.

4.3. En el caso concreto, se encuentra acreditado el derecho de petición presentado por la accionante ante la Secretaría de Movilidad de esta ciudad, del cual presuntamente no ha obtenido respuesta completa congruente y de fondo; hecho que el *a quo* tuvo por cierto al considerar que la accionada no dio contestación a la acción de tutela, aplicando la presunción de veracidad prevista en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, por lo que dispuso la concesión del amparo, al encontrar puntos de la petición que no se encontraban abordados.

Frente a esa situación, lo primero que advierte esta judicatura es que el fallo de primera instancia fue emitido el pasado 05 de julio del año en curso, momento para el cual la Secretaría de Movilidad no se había manifestado frente a los hechos y pretensiones de la tutela, por lo que los argumentos expuestos en la impugnación de fecha 10 de julio de hogaño resultan claramente extemporáneos; más aun si se tiene en cuenta que la accionada fue notificada de la presente queja constitucional desde el 26 de junio de esta anualidad, sin que se justifique la tardanza en rendir el informe solicitado, aun cuando solicitó una prórroga para su aportación.

Y aunque con el recurso de impugnación manifestó la convocada haber dado contestación a la petición de la actora, y para acreditarlo allegó copia de la respuesta de fecha 14 de junio de este año, lo cierto es que la misma no fue remitida al correo electrónico de la demandante sino hasta el 10 de julio de 2023 como se observa en el archivo 022, es decir, con posterioridad a la emisión de la sentencia cuestionada. Debe tenerse en cuenta además que, la accionada no realizó en el término oportuno, reparo alguno frente a las narrativas que sustentan la acción, pese a que fue notificada por el juzgado de primera instancia previo a proferir su fallo, pues no allegó contestación ni el informe requerido; tampoco se evidenció en dicha oportunidad que la petición que motivó la tutela haya sido contestada, situación que conllevó a dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, teniendo presuntivamente ciertos los hechos que dieron origen a la queja constitucional, y en ese sentido, amparar los derechos fundamentales de la accionante.

Por lo tanto, no se puede determinar que la orden dada por el *a quo* estuvo desacertada, dado que la presunción de veracidad de los hechos que motivaron la acción se dio con fundamento en el artículo 20 citado; amén de que no se acreditó haberse dado contestación al derecho de petición de la actora, previo a la decisión de instancia, pero además, porque la respuesta que dice la accionada haber brindado a la accionante, tan solo vino a ser notificada a ella, luego de la emisión del fallo de primera instancia.

Diferente es que la accionada haya procurado el cumplimiento de la sentencia primigenia, frente a la respuesta otorgada a la tutelante, sin que ello implique de ninguna manera la revocatoria de la misma, pues la verificación de su acatamiento está sujeto al estudio del juez de primer grado quien concedió el amparo.

5. CONCLUSIÓN

En consecuencia de lo anterior, no existen razones para revocar la sentencia impugnada, por lo tanto, se confirmará la misma, según lo expuesto en esta providencia.

6. DECISIÓN DE SEGUNDO GRADO

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de este Distrito Capital de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de

Colombia y por autoridad de la Constitución,

RESUELVE

6.1 Confirmar el fallo de tutela proferido el 05 de julio de 2023 por el Juzgado 57 Civil Municipal de Bogotá, por lo expuesto en la parte motiva de esa decisión.

6.2. Notificar esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito.

6.3. Remitir las diligencias a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase
El Juez,

LUIS AUGUSTO DUEÑAS BARRETO

DLR

Firmado Por:
Luis Augusto Dueñas Barreto
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 025
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d400add5636592deb928a5798cd8a6ae89986d4ffa2ec1aa433989da26b17b4b**

Documento generado en 22/08/2023 04:54:53 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>